

Reporte sobre la Magistratura en el Mundo

(Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)*

Naciones Unidas (Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados):

- **Margaret Satterthwaite fue nombrada Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.** Margaret Satterthwaite fue nombrada Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2022. La profesora Satterthwaite es una académica y profesional de derechos humanos, a nivel internacional, con décadas de experiencia en el área. Es profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde dirige la Clínica de Justicia Global y se desempeña como directora académica del Instituto Robert y Helen Bernstein para los Derechos Humanos y del Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global. Su quehacer académico se ha centrado en el acceso a la justicia, el empoderamiento legal y la innovación metodológica en derechos humanos, entre otros temas, y ha publicado y editado diversos libros, decenas de artículos, así como capítulos en otras publicaciones. La profesora Satterthwaite ha trabajado con personas y comunidades que buscan hacer realidad sus derechos en todo el mundo, incluyendo Guyana, Haití, Kenia, Nigeria, Irlanda del Norte, Uganda, Estados Unidos y Yemen. Ha litigado en foros internacionales y nacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La profesora Satterthwaite se graduó magna cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Trabajó para un juez de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos y posteriormente para jueces de la Corte Internacional de Justicia. Ha trabajado para una variedad de organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional EE. UU., donde cofundó y luego dirigió el programa de la organización para defender los derechos humanos de las personas perseguidas por su orientación sexual o identidad de género. También trabajó con Street Law, Human Rights First y la Comisión de la Verdad y la Justicia de Haití. También se ha desempeñado como consultora en derechos humanos y experta asesora de la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y dos relatores especiales de la ONU. Ha sido miembro de las juntas directivas de varias organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional EE. UU., la Iniciativa Global sobre Derechos Económicos y Sociales, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y la Democracia Digital. Para conocer más detalles sobre la profesora Satterthwaite por favor consulte su [hoja de vida](#) (en inglés).

OEA (CIDH):

- **CIDH publica acuerdo de solución amistosa del Caso 12.289 sobre violaciones a las garantías judiciales de Guillermo Santiago Zaldívar en Argentina.** La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa su decisión de aprobar y publicar el acuerdo de solución amistosa del Caso 12.289 Guillermo Santiago Zaldívar de Argentina, a través de su Informe de Homologación No. 168/22. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a las garantías judiciales, en perjuicio de Guillermo Santiago Zaldívar, derivada de la negación de un recurso de apelación de la sentencia a través de la cual fue condenado por el delito de homicidio culposo, así como por el retardo injustificado en dicho proceso penal. El 18 de octubre de 2021, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en el que el Estado argentino reconoció la responsabilidad internacional por la violación del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior establecido en artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, en perjuicio del señor Zaldívar. El Estado se comprometió a adoptar medidas de reparación consistentes en: a) dar publicidad al acuerdo en el "Boletín Oficial de la República Argentina", y en dos diarios de alcance nacional mediante una gacetilla de prensa, cuyo texto será consensuado previamente con la parte peticionaria; y b) constituir un Tribunal Arbitral ad-hoc, a fin de que determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas al Sr Zaldívar. Al respecto, la Comisión consideró en su Informe de [Solución Amistosa No. 168/22](#), que el acuerdo se encontraba pendiente de cumplimiento, por lo tanto,

continuará con el seguimiento hasta verificar su total implementación. La CIDH reconoce los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa, que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención, y saluda los esfuerzos realizados por el Estado para construir a una política pública de soluciones amistosas y resolución alternativa de conflictos, al tiempo que le invita a seguir utilizando dicho mecanismo para la resolución de asuntos en trámite ante el sistema de peticiones y casos individuales. Asimismo, congratula a la parte peticionaria y valora sus esfuerzos para participar en la negociación e impulso de este acuerdo. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Chile (Poder Judicial):

- **Corte Suprema acoge recurso de casación y confirma monto indemnizatorio a víctima de torturas en Calama.** La Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, confirmó la resolución de primer grado que condenó al fisco a pagar una indemnización \$45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) por concepto de daño moral, a Benjamín Patricio Muñoz Díaz, detenido el 14 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros, quienes lo trasladaron, primero, al cuartel de la Policía de Investigaciones de Chuquicamata y, posteriormente, a la comisaría de la localidad y al regimiento de Calama. Recintos donde fue sometido a golpizas e, incluso, a simulacros de fusilamiento. En fallo unánime (causa rol 16.919-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier– estableció que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, no fundamentó las razones por las cuales rebajó el monto de la indemnización concedida en primera instancia. “Que, en la especie, resulta evidente que la sentencia impugnada adolece de las falencias denunciadas, toda vez que de un estudio de ella aparece, en los términos acotados en la reflexión anterior, una nula y por lo tanto insuficiente exposición de los ratiocinios que le sirven de soporte, en todos sus extremos, por lo que no se ha acatado el mandato del legislador”, sostiene el fallo. La resolución agrega que: “Efectivamente, la sentencia recurrida luego de exponer las alegaciones contenidas en los recursos deducidos por las partes y citar jurisprudencia que establece la procedencia de la indemnización de perjuicios en este tipo de casos, en el considerando quinto expresa: ‘esta Corte rebajará el monto de la indemnización por daño moral, como se dirá en lo resolutivo’, luego de lo cual confirma la sentencia apelada con declaración que se reduce el monto de la indemnización a \$22.500.000 (veintidós millones quinientos mil pesos), sin analizar el detalle de los antecedentes que los llevaron a disminuir el monto ordenado pagar al Fisco de Chile por el tribunal de primera instancia, lo que atendido la naturaleza de la impugnación formulada constituye la omisión de los razonamientos del juicio denunciados por el arbitrio. No hay que olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público, y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto”. Para el máximo tribunal: “La necesidad de un análisis en tal sentido emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida y de lo expuesto por los litigantes, dado que para una adecuada resolución del asunto era imperativo analizar los perjuicios que la detención, tortura y apremios ilegítimos provocó a Benjamín Muñoz Díaz. La controversia planteada versaba justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile con su actuar causaron al recurrente”. “Que como puede advertirse, el fallo incurre en la motivación alegada y consagrada en el artículo 768 N°5, del Código de Procedimiento Civil, porque no acata la exigencia del literal N° 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que impone el deber de los jueces de anotar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por lo que en las condiciones anotadas el recurso de casación en la forma promovido en contra del fallo impugnado por la demandante, será acogido”, añade. “Que, atendido lo resuelto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, no se emitirá pronunciamiento respecto del recurso de casación en el fondo, por innecesario”, concluye.

Unión Europea (TJUE):

- **Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-873/19 | Deutsche Umwelthilfe (Homologación de tipo de vehículos de motor)** Las asociaciones de defensa del medio ambiente reconocidas deben poder impugnar judicialmente la homologación de tipo CE de vehículos equipados con «dispositivos de desactivación» que puedan estar prohibidos. Un programa informático con el que van equipados una serie de vehículos diésel, que reduce la eficacia del sistema de control de las emisiones a temperaturas normales y durante la mayor parte del año, constituye un dispositivo de desactivación prohibido Deutsche Umwelthilfe, asociación de defensa del medio ambiente legitimada para ejercitar acciones judiciales en virtud de la legislación alemana, impugna ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Schleswig-Holstein la resolución de la Oficina Federal alemana de Circulación de los Vehículos de Motor por la que se autoriza, en el caso de determinados vehículos de la marca Volkswagen, el uso de un programa informático que reduce la recirculación de los gases contaminantes en función de la temperatura exterior. El programa informático en cuestión establece una ventana de temperaturas en virtud de la cual la tasa de recirculación de los gases de escape es del 0 % cuando la temperatura exterior es inferior a – 9° C, del 85 % cuando se sitúa entre – 9 y 11° C, y aumenta, por encima de 11° C, hasta el 100 % únicamente a partir de una temperatura exterior superior a 15° C. Así pues, la tasa de recirculación de los gases de escape se reduce al 85 % cuando se alcanzan las temperaturas medias registradas en Alemania, que, en 2018, fueron de 10,4° C. Según Deutsche Umwelthilfe, una ventana de temperaturas de este tipo constituye un dispositivo de desactivación prohibido por el Derecho de la Unión. Alemania, contra la que se dirige el recurso, alega que Deutsche Umwelthilfe no goza de legitimación activa para impugnar la resolución controvertida, que modifica una homologación de tipo CE, de modo que su recurso es inadmisibile. Por lo demás, a su parecer, la ventana de temperaturas en cuestión es conforme con el Derecho de la Unión. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Schleswig-Holstein, que alberga dudas acerca de estos dos extremos, ha solicitado al Tribunal de Justicia que interprete, por una parte, el Convenio de Aarhus sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y, por otra parte, el Reglamento n.º 715/2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos. En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia responde, en primer lugar, que el Convenio de Aarhus, en relación con la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una asociación de defensa del medio ambiente legitimada para ejercitar acciones judiciales en virtud del Derecho nacional no pueda impugnar ante un órgano jurisdiccional nacional una resolución administrativa por la que se concede o se modifica una homologación de tipo CE que pueda ser contraria a la prohibición de uso de dispositivos de desactivación que reduzcan la eficacia de los sistemas de control de las emisiones. En efecto, el Convenio de Aarhus, en relación con la Carta, obliga a los Estados miembros a garantizar la tutela judicial efectiva y les prohíbe privar a tales asociaciones de toda posibilidad de instar el control del cumplimiento de determinadas normas del Derecho medioambiental de la Unión. En segundo lugar, por lo que respecta a la ventana de temperaturas controvertida, el Tribunal de Justicia recuerda que ya ha declarado, en relación con una ventana de temperaturas idéntica, 2 que un dispositivo que únicamente garantiza el respeto de los valores límite de emisiones cuando la temperatura exterior se sitúa entre 15 y 33° C y se circula a menos de 1 000 metros de altitud es un «dispositivo de desactivación». Según el Reglamento n.º 715/2007, está prohibido el uso de dispositivos de desactivación que reduzcan la eficacia de los sistemas de control de las emisiones. No obstante, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, un dispositivo de desactivación puede estar justificado, excepcionalmente, si se demuestra que dicho dispositivo responde estrictamente a la necesidad de evitar los riesgos inmediatos de averías o accidentes en el motor causados por un mal funcionamiento de un componente del sistema de recirculación de los gases de escape de tal gravedad que generen un peligro concreto durante la conducción del vehículo equipado con ese dispositivo. En el presente asunto, incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar si este es el caso. Además, como también ha declarado ya el Tribunal de Justicia, la «necesidad» de usar un dispositivo de desactivación solo existirá cuando, en el momento de la homologación de tipo CE de ese dispositivo o del vehículo que va equipado con él, ninguna otra solución técnica permita evitar riesgos inmediatos de averías o accidentes en el motor que generen un peligro concreto durante la conducción del vehículo. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia recuerda que, aunque exista la necesidad que se acaba de describir, el dispositivo de desactivación estará prohibido si debiera funcionar, en condiciones reales de circulación, durante la mayor parte del año. En efecto, admitir un dispositivo de desactivación de tales características

podría hacer que la excepción se aplicase con más frecuencia que la prohibición y, por tanto, socavaría desproporcionadamente el principio mismo de la limitación de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).

- ***Sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-704/20 y C-39/21/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento).*** El juez nacional debe verificar de oficio la legalidad de una medida de internamiento adoptada respecto de un nacional extranjero que se halle en situación irregular o de un solicitante de asilo. Del Derecho de la Unión resulta que la adopción de una medida de internamiento o de mantenimiento del internamiento de un nacional extranjero que haya presentado una solicitud de protección internacional o que se halle en situación irregular en el territorio de un Estado miembro está supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos de legalidad. Un nacional argelino, un nacional marroquí y un nacional de Sierra Leona impugnaron las medidas de internamiento adoptadas en su contra ante distintos órganos jurisdiccionales neerlandeses. El Consejo de Estado neerlandés y el Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Bolduque, han preguntado al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión obliga a los tribunales a examinar de oficio el eventual incumplimiento de un requisito de legalidad de una medida de internamiento que no haya sido invocado por la persona afectada. En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que todo internamiento de un nacional de un tercer país, ya sea en el marco de un procedimiento de retorno a raíz de una estancia irregular, de la tramitación de una solicitud de protección internacional o del traslado del solicitante de tal protección al Estado miembro responsable del examen de su solicitud, constituye una injerencia grave en el derecho de ese nacional a la libertad consagrado en el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente, cuando conste que no concurrieron o que han dejado de concurrir los requisitos de legalidad del internamiento, la persona afectada debe ser puesta en libertad inmediatamente. Así sucede, en particular, cuando se comprueba que el procedimiento de retorno, de examen de la solicitud de protección internacional o de traslado, según los casos, ha dejado de ejecutarse con toda la debida diligencia o que la medida de internamiento no es o ha dejado de ser proporcionada. El Tribunal de Justicia subraya, a continuación, que, en materia de internamiento de extranjeros, el legislador de la Unión no se ha limitado a establecer normas comunes de fondo, sino que también ha establecido, en aras del principio de tutela judicial efectiva, normas comunes procesales, cuya finalidad es garantizar que exista en cada Estado miembro un régimen que permita a la autoridad judicial competente liberar, en su caso tras un examen de oficio, a la persona de que se trate tan pronto como conste que su internamiento no es legal o ha dejado de serlo. De ello se sigue que la autoridad judicial competente para controlar la legalidad de una medida de internamiento debe tomar en consideración todos los elementos, en particular los fácticos, de los que tenga conocimiento, completados o aclarados en el marco de las medidas procesales que considere necesario adoptar en virtud de su Derecho nacional, y, sobre la base de esos elementos, poner de manifiesto, en su caso, el incumplimiento de un requisito de legalidad derivado del Derecho de la Unión, aun cuando ese incumplimiento no hubiera sido invocado por la persona afectada. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la obligación que incumbe a dicha autoridad judicial de invitar a cada una de las partes a pronunciarse sobre este requisito de conformidad con el principio de contradicción.
- ***Sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-885/19 P | Fiat Chrysler Finance Europe/Comisión y C-898/19 P | Irlanda/Comisión.*** «Tax rulings»: el Tribunal de Justicia declara que el Tribunal General se equivocó al confirmar el marco de referencia elegido por la Comisión para la aplicación del principio de libre competencia a las sociedades integradas en Luxemburgo y al no tener en cuenta las normas específicas que ponen en práctica dicho principio en ese Estado miembro. Así pues, el Tribunal de Justicia anula la Decisión controvertida de la Comisión, señalando que es erróneo su análisis del sistema de referencia y, por extensión, de la existencia de una ventaja selectiva concedida a FFT. El 3 de septiembre de 2012, las autoridades tributarias luxemburguesas adoptaron una decisión fiscal anticipada («tax ruling») a favor de Fiat Chrysler Finance Europe (en lo sucesivo, «FFT»), empresa del Grupo Fiat que prestaba servicios de tesorería y financiación a las sociedades del Grupo establecidas en Europa. La decisión en cuestión avalaba un método de determinación de la remuneración de FFT para dichos servicios, lo que permitía a FFT determinar anualmente sus beneficios imposables en virtud del impuesto de sociedades en Luxemburgo. Por Decisión de 21 de octubre de 2015, la Comisión consideró que la citada decisión fiscal anticipada constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior en el sentido del artículo 107 TFUE. Además, declaró que Luxemburgo no le había notificado el proyecto de decisión fiscal anticipada en cuestión ni había cumplido con la obligación de suspenderla, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 108 TFUE, apartado 3. La Comisión ordenó a Luxemburgo que recuperara de FFT la ayuda, por ser ilegal e incompatible con el mercado interior. Luxemburgo y FFT interpusieron sendos recursos ante el Tribunal General, solicitando la anulación de la

Decisión de la Comisión. Mediante sentencia de 24 de septiembre de 2019, el Tribunal General desestimó los recursos de anulación de la Decisión de la Comisión interpuestos por Luxemburgo y FFT, confirmando al mismo tiempo la validez de dicha Decisión. Con sus recursos de casación respectivos, FFT (C-885/19 P) e Irlanda (C-898/19 P) solicitaron la anulación de dicha sentencia. Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia anula la sentencia dictada por el Tribunal General el 24 de septiembre de 2019 en el asunto Luxemburgo y Fiat Chrysler Finance Europe / Comisión (asuntos acumulados T-755/15 y T-759/15) y la Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 2015 relativa a la ayuda de Estado ejecutada por Luxemburgo en favor de FFT. Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que las intervenciones de los Estados miembros en las materias que no han sido objeto de armonización en el Derecho de la Unión no están excluidas del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado FUE relativas al control de las ayudas de Estado. Recuerda a continuación que la calificación de una medida nacional como «ayuda de Estado» exige que concurren cuatro requisitos. En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, la intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En tercer lugar, debe conferir una ventaja selectiva a su beneficiario. En cuarto lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia. En el marco del análisis de las medidas fiscales, desde el punto de vista del Derecho de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado, el examen del requisito relativo a la ventaja selectiva supone, en un primer momento, determinar el sistema de referencia, a saber, el régimen tributario «normal» aplicable en el Estado miembro de que se trate, y demostrar, en un segundo momento, que la medida fiscal en cuestión supone una excepción a ese sistema de referencia, en la medida en que introduce diferenciaciones entre operadores económicos que, con respecto al objetivo perseguido por dicho sistema, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable, sin que exista ninguna justificación que resulte de la naturaleza o de la estructura del sistema en cuestión. Por lo tanto, para apreciar el carácter selectivo de una medida fiscal, es necesario que el régimen tributario común o sistema de referencia aplicable en el Estado miembro de que se trate esté correctamente identificado en la decisión de la Comisión y sea examinado por el juez que conoce de una controversia relativa a dicha identificación. A ese respecto, el Tribunal de Justicia concluye que, en la medida en que, fuera de los ámbitos en los que el Derecho tributario de la Unión es objeto de armonización, es el Estado miembro del que se trate el que determina, mediante el ejercicio de sus propias competencias en materia de fiscalidad directa y en observancia de su autonomía fiscal, las características constitutivas del impuesto, para identificar el sistema de referencia en materia de fiscalidad directa debe tenerse en cuenta solamente el Derecho nacional aplicable en el Estado miembro de que se trate, ya que esa identificación es, a su vez, un requisito previo indispensable para apreciar no solo la existencia de una ventaja, sino también si esta reviste carácter selectivo. Según el Tribunal de Justicia, el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1, al no tener en cuenta la exigencia derivada de la jurisprudencia según la cual, para determinar si una medida fiscal ha redundado en una ventaja selectiva para una empresa, incumbe a la Comisión proceder a una comparación con el régimen impositivo normalmente aplicable en el Estado miembro de que se trate, tras un examen objetivo del contenido, de la articulación y de los efectos concretos de las normas aplicables en virtud del Derecho nacional de ese Estado. En efecto, el Tribunal General se equivocó al ratificar el enfoque consistente en aplicar un principio de libre competencia distinto del definido por el Derecho luxemburgués y limitarse a identificar, con el objetivo perseguido por el sistema general del impuesto de sociedades en Luxemburgo, la expresión abstracta de ese principio, y consistente en examinar la decisión anticipada en cuestión sin tener en cuenta el modo en que el referido principio está incorporado concretamente a ese Derecho por lo que respecta, en particular, a las sociedades integradas. Además, al aceptar que la Comisión pudiera invocar normas que no formaban parte del Derecho luxemburgués, aun cuando había recordado que, en el estado actual de desarrollo del Derecho de la Unión, esa institución no disponía de competencias que le permitieran definir de forma autónoma la imposición considerada «normal» de una sociedad integrada, ignorando las normas fiscales nacionales, el Tribunal General infringió las disposiciones del Tratado FUE relativas a la adopción por la Unión Europea de medidas de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de fiscalidad directa. El Tribunal de Justicia concluye que los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida relativos al examen del razonamiento adoptado con carácter principal por la Comisión, según el cual la decisión anticipada en cuestión suponía una excepción al sistema general del impuesto de sociedades de Luxemburgo, adolecen de un error de Derecho en la medida en que el Tribunal General aprobó el enfoque de la Comisión. En concreto, dicho error consistió, en esencia, en no tener en cuenta el principio de libre competencia, tal como se establece en el artículo 164, apartado 3, del Código luxemburgués del Impuesto y se precisa en la correspondiente Circular n.º 164/2, al definir el sistema de referencia en el marco del examen realizado en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 1, para determinar si la decisión anticipada en cuestión confiere una ventaja selectiva a su beneficiario. Habida cuenta de lo

anterior, el Tribunal de Justicia anula la sentencia recurrida, considera que el estado del litigio le permite resolverlo directamente y, al hacerlo, anula la Decisión controvertida, porque el error en que incurrió la Comisión en la determinación de las normas efectivamente aplicables en virtud del Derecho nacional pertinente y, por lo tanto, en la identificación de la imposición considerada «normal» respecto de la cual debía apreciarse la decisión anticipada en cuestión vicia todo el razonamiento referido a la existencia de una ventaja selectiva. La anulación de la Decisión controvertida procede pese a la circunstancia de que la Comisión también incluyera en ella, con carácter subsidiario, un razonamiento basado en el artículo 164, apartado 3, del Código luxemburgués del Impuesto y en la correspondiente Circular n.º 164/2. En efecto, el Tribunal de Justicia declara que dicho razonamiento se limita a remitir al análisis principal de la Comisión sobre la aplicación correcta del sistema de referencia, de modo que solo en apariencia rectifica el error en que incurrió al identificar el sistema de referencia que debería haber constituido la base de su análisis relativo a la existencia de una ventaja selectiva.

Nigeria (EP):

- **Condenados a 20 latigazos dos hombres por un vídeo satírico en TikTok sobre el gobernador de Kano.** Un tribunal de Nigeria ha condenado a 20 latigazos a dos hombres por publicar un vídeo satírico en la plataforma TikTok en el que criticaban al gobernador del estado de Kano (norte), Abdullahi Ganduje, al que presentaron como una persona corrupta. Los sentenciados, Mubarak Muhammad y Nazifi Muhammad, llevan semanas detenidos por supuesta difamación contra Ganduje, según ha informado el diario nigeriano 'The Premium Times'. Además de los latigazos, deberán pagar una multa por "alteración del orden público". Asimismo, los condenados deberán realizar servicios sociales, concretamente limpiar las instalaciones del tribunal, y publicar en TikTok y otras redes sociales un vídeo disculpándose con el gobernador de Kano por el vídeo, en el que presentan a Ganduje vendiendo todos los terrenos públicos del estado. Ganduje ha estado en el centro de la polémica en los últimos años después de que el diario 'Daily Nigerian' publicara en 2018 un vídeo en el que se le veía recibiendo dinero de un contratista público. Además, su esposa fue arrestada en octubre de 2021 en el marco de un caso de sobornos y fraude denunciado por su hijo.

De nuestros archivos:

22 de abril de 2009
Francia (Swiss Info)

- **Un tribunal dice que "Bodies" es indecente y la clausura.** Una exhibición de cadáveres humanos, que ha viajado por todo el mundo y ha recibido millones de visitantes, es indecente y debe cerrarse, ordenó el martes un tribunal francés. La decisión se basa en una nueva ley que regula el protocolo de actuación con los fallecidos y podría forzar a todos los museos franceses a retirar cadáveres o esqueletos de sus expositores. En "Our Body", varios cadáveres han sido diseccionados para revelar el funcionamiento interno del cuerpo. Los grupos de derechos humanos franceses condenaron la iniciativa, repitiendo las acusaciones de exposiciones previas de que los cadáveres no identificados podrían haber sido víctimas de ejecuciones chinas. Dos grupos llevaron a los organizadores al tribunal y en una sentencia conocida el martes, la juez Louis-Marie Raingeard dijo que la muestra denigraba el cuerpo humano, sin entrar en el origen de los cadáveres. "La ley dice que un cadáver debería estar en un cementerio", dijo la juez, dando a los organizadores 24 horas para cerrar la exposición o hacer frente a una multa de 20.000 euros por cada día que no cumplan la orden. Algunos de los cadáveres tienen cortes transversales limpios, otros son exhibidos en diferentes grados de disección. La juez dijo que los cadáveres deberían ser entregados a las autoridades bajo la amenaza de una multa de 50.000 euros al día. La exposición francesa fue montada por el empresario Bernardin, quien dijo que apelaría la decisión. "Estoy perplejo por esta decisión", dijo Bernardin. "Aquí no hay falta de respeto por los muertos. No es una muestra de arte, es una muestra anatómica educativa", agregó. Los cadáveres en exposición están conservados mediante una conservación polimérica, un largo proceso que reemplaza todos los fluidos corporales con polímeros para crear especímenes inodoros y de larga duración. La juez usó una ley de diciembre de 2008 para prohibir la muestra, pero Bernardin dijo que la ley establecía un protocolo para que familias y autoridades depositaran correctamente los cadáveres y no debería aplicarse a las exhibiciones de ciencias. "¿Qué va a pasar con todos los cadáveres mostrados en numerosos museos en toda Francia? Van a tener que eliminar todos los cadáveres en exposición?", declaró, planteando la perspectiva de que las momias

egipcias tengan que ser retiradas de la vista. Numerosas versiones de la exposición han recibido unos 30 millones de visitas en todo el mundo y el de París ha atraído a un flujo constante de visitantes - impertérritos por los 15,5 euros de la entrada - inusualmente altos para una exhibición en la capital francesa. "Creo que es bueno mostrar esto a la gente. Te da una visión totalmente diferente del cuerpo humano. Es verdad que es un poco impactante, pero es la realidad. Demuestra que todos somos iguales", dijo Nathalie Bernard, una turista francesa. La exposición tenía previsto permanecer en París hasta el 10 de mayo antes de trasladarla a otro recinto justo fuera de la capital.



La decisión se basa en una nueva ley que regula el protocolo de actuación con los fallecidos

Elaboración: Dr. Alejandro Anaya Huertas

 [@anaya_huertas](https://twitter.com/anaya_huertas)

* El presente Reporte se integra por notas publicadas en diversos medios noticiosos del ámbito internacional, el cual es presentado por la SCJN como un servicio informativo para la comunidad jurídica y público interesado, sin que constituya un criterio oficial para la resolución de los asuntos que se someten a su consideración y sin que asuma responsabilidad alguna sobre su contenido.